



Santiago de Cali, tres (03) de febrero dos mil veintiuno (2.021)

Auto Interlocutorio No. 61

RADICACION	76001-23-33-000-2019-01190-00
MEDIO DE CONTROL	ELECTORAL
DEMANDANTE	GUSTAVO ADOLFO PRADA CARDONA Y OTROS
DEMANDADO	JOSE RODRIGO BENITEZ VASQUEZ Y OTROS
MAGISTRADO PONENTE	VÍCTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ.
TEMA	RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

I. ASUNTO

Ingresa el proceso al Despacho para señalar fecha para audiencia inicial.

Mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso suspender los términos procesales en los juzgados, tribunales y Altas Cortes entre el 16 y 20 de marzo de 2020. Esta medida fue prorrogada mediante los Acuerdos No. PCSJA20-11521 de 19 de marzo, PCSJA20-11526 de 22 de marzo, PCSJA20-11532 de 11 de abril, PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020

En desarrollo del Decreto 637 de 6 de mayo de 2020<sup>1</sup> y durante la suspensión de términos antes referida, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No. 806 de 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, en el cual se regularon distintas etapas de los procesos judiciales..

Posteriormente, se profirió la Ley 2080 de 2021 *“POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN”*, en su artículo 38 dispuso:

*"Modifíquese el párrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor: **Parágrafo 2º.** De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas. Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A."*

El artículo 39 ibidem señaló:

*"Modifíquese el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: **Artículo 179. Etapas.** El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas: 1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. 2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y 3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación de las partes. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutive."*

Por su parte el artículo 42 ibidem dispuso:

*"Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor: **Artículo 182A. Sentencia anticipada.** Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia."*

*Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito."*

Para culminar, el artículo 86 ibidem señaló:

*"Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.*

*Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.*

*En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones."*

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que lo decidido en el presente asunto no versa sobre recursos, práctica de pruebas decretadas, diligencias iniciadas ni otra actuación de que trata el artículo anterior, necesario resulta adecuar el proceso al tránsito normativo de la Ley 2080 de 2021; en consecuencia, previo a la realización de la audiencia inicial, si fuera necesaria, ha de decidirse sobre las excepciones propuesta y las pruebas solicitadas por las partes.

## II. DECISION DE EXCEPCIONES

2.1. Dentro del término para contestar la demanda, los demandados: **Partido de la U y el señor José Rodrigo Benítez Vázquez** proponen la excepción de inepta demanda; la primera indicó que se configuraba por la falta de conexidad entre los hechos, el concepto de violación y normas violadas; en tanto el segundo, manifestó que la demanda era inepta toda vez que no se estableció una causal de nulidad específica; aunado lo anterior las pretensiones atacan un acto preparatorio o trámite para que genere nulidad en otros documentos de contenido electoral.

2.2. El Consejo Nacional Electoral formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que el proceso versa sobre una causal subjetiva, esto es, aquella referente a los requisitos, calidades y

condiciones de elegibilidad de los candidatos, además, no se presentó solicitud alguna de revocatoria de la inscripción por la causal de prohibición doble militancia, por lo tanto, el Consejo no ha hecho pronunciamiento alguno.

### 2.1. Trámite de las excepciones planteadas.

En este punto, se pone de presente que de las excepciones propuestas se corrió traslado de conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.A.C.A. La parte demandante se pronunció en esta oportunidad precisando que la demanda fue promovida cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la ley 1437 de 2011<sup>1</sup>.

## II. CONSIDERACIONES

### 3.1. Excepción denominada “falta de legitimación en la causa por Pasiva”, propuesta por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

Sobre el particular, el Consejo de Estado<sup>2</sup> ha señalado que la legitimación en la causa es la posibilidad de que la persona formule o controvierta las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.

Dicha Corporación ha precisado además que existen dos tipos de legitimación en la causa: la legitimación de hecho y la legitimación material. La primera ha sido definida como “una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”, y la segunda, como “la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas”<sup>3</sup>

Bajo ese entendido, ha concluido el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que la legitimación en la causa material no es constitutiva de excepción de fondo, sino un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable, ya sea para el demandante o para el demandado, y que, en consecuencia, la misma no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, toda vez que “...la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que

<sup>1</sup> Fls.177-185.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia 24 de octubre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero. Radicación 680012315000199511195(25869).

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2012, Consejero Ponente Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Radicación No. 25000232600019950093601 (22984).

se trata de una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”<sup>4</sup>

Ahora bien, revisada la demanda y los documentos acompañados se observa que, lo pretendido por la parte actora, es la nulidad del acta de escrutinio general contenida en el Formulario E-26 y, en consecuencia, se ordene la cancelación de la credencial conferida al señor José Rodrigo Benítez Vázquez como alcalde electo del Municipio de Versailles, Valle.

De acuerdo con los lineamientos expuestos, y tomando en consideración la definición que jurisprudencialmente se le ha dado a la legitimación de hecho, para la Sala es claro que, en este momento procesal, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL no tiene vocación de prosperidad, si en cuenta se tiene que en el presente asunto se pretende la nulidad del acta de escrutinio general de votos.

Por lo tanto, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL al ser el ente encargado de inspeccionar y vigilar el proceso y la organización electoral, en este caso, estaría legitimada formalmente o de hecho en la causa por pasiva, sin que ello implique que le asiste o no responsabilidad alguna en los hechos que se demanda.

Para culminar, si bien el Consejo Nacional Electoral como autoridad en la materia, debe responder las peticiones de los ciudadanos que de manera respetuosa, clara y congruente le hicieren, lo cierto es que el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 no dispone como requisito de procedibilidad que el interesando en demandar un acto de elección o nombramiento deba solicitar en sede administrativa la nulidad de dicha elección o nombramiento.

Así las cosas, la presente excepción no se declarará probada.

### 3.2. Excepción de “inepta demanda” propuestas por los demandados.

Sobre esta causa ha indicado el Consejo de Estado<sup>5</sup>.

*“Tratándose de actos electorales, las causales con base en las cuales se puede cuestionar la legalidad del acto se encuentran consagradas en los artículos 137 y 275 del CPACA. De la misma forma, el concepto de la violación será aquel que desarrolle la parte demandante con base en los elementos, que, a su juicio, evidencien que se configuró alguna de las causales antes anotadas.*

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de febrero de 2010, Consejero Ponente Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Radicación No. 70001233100019950507201 (17720).

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO, providencia del 28 de febrero de 2019, radicación número: 11001-03-28-000-2018-00602-00.



*Ahora bien, no se puede perder de vista que el medio de control contemplado en el artículo 139 del CPACA tiene naturaleza pública. Por consiguiente, es totalmente viable que un proceso electoral se inicie por una persona sin el más mínimo conocimiento jurídico; sin que, por supuesto el carecer de formación jurídica se erija como un obstáculo para que cualquier persona pueda ejercer el control de legalidad del acto acusado, lo que sucede es que el análisis de la demanda requerirá por parte del juez de un examen sistemático e integral.*

*No de otra manera se explica que el CPACA haya dotado al juez, como director del proceso, de amplias facultades de interpretación de la demanda, potestades que adoptan mayor fuerza e importancia tratándose del proceso electoral dada su naturaleza pública, la cual impone que, en ciertos eventos, la autoridad judicial realice un ejercicio hermenéutico de análisis sistemático y armónico de la demanda y su corrección, si es del caso, para entender a cabalidad las censuras presentadas.*

***Debe resaltarse que este ejercicio de interpretación no comporta un detrimento para los derechos de la contraparte, pues no se trata de flexibilizar los requisitos de admisión de la demanda, sino de que la naturaleza pública de este medio de control tenga efecto útil. Por ello, siempre que el juez pueda identificar con toda certeza: i) el acto sometido a control y ii) los reproches que a él se endilgan, se entenderá que sí existe concepto de violación con independencia de lo desafortunada que pueda resultar la redacción o la metodología de la demanda.***

***En este contexto, si del examen de la demanda y su corrección se pueden extraer las razones que llevaron al demandante a ejercer su derecho de acción y las normas en la que sustenta su petición, la autoridad judicial puede, válidamente, concluir que sí existe un verdadero concepto de la violación, y, por ende, proseguir el proceso.***

*Esta posición no es aislada, ya que la Sala ha concluido que para admitir una demanda de nulidad electoral, el requisito de que trata el numeral 4 del artículo 162 del CPACA debe analizarse teniendo en cuenta la naturaleza pública de la citada herramienta judicial, pues dado ese carácter es usual que los escritos introductorios no respondan a la técnica jurídica o el lenguaje especializado propio de los profesionales del derecho, sin que esa circunstancia pueda establecerse como un obstáculo para el acceso efectivo a la administración de justicia".*  
(resaltado fuera del texto)

Rama Judicial  
República de Colombia

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la excepción propuesta, debe señalarse que en la demanda se indicó el supuesto factico que sustenta las pretensiones; así mismo, se indicó cuales fueron dichas actividades. En cuanto a las normas vulneradas y el concepto de la violación señaló los artículos 1, 2, 4, 40 y 108 de la Constitución política, Ley 130 de 1994, reglamento 01 de 2003, estatuto del partido de Unidad Nacional y precedente jurisprudencial; de igual forma en el libelo demandatorio se evidencia que el actor pretende la nulidad del aval otorgado al demandado, formularios E -6 AL, E-8AL, E - 26 AL y acta de declaratoria de elección por violación a disposiciones constitucionales, legales y estatutarias conforme lo dispone el artículo 275 del CPACA.

Es preciso señalar que el concepto de la violación no está sometido a un modelo estricto de técnica jurídica, solo en ausencia total del mismo, se podrá entender que la demanda es defectuosa por carencia de dicho presupuesto. En este caso, se observa que las normas vulneradas hacen relación con la causal

de la doble militancia y en los hechos de la demanda que sirven de fundamento a las pretensiones se expone porqué se vulneran estas disposiciones.

En este contexto, es claro que de la lectura armónica de la demanda se infiere con claridad cuál es el reproche en el que la parte actora sustenta su escrito introductorio. por lo que, conforme lo indica el Consejo de Estado, lo que interesa es que se “pueda identificar con toda certeza: i) el acto sometido a control y ii) los reproches que a él se endilgan”.

Sostienen igualmente los demandados, que las pruebas no demuestran la causal invocada, sin embargo, este será un análisis que corresponde al fondo del asunto, al igual que si prosperan o no las pretensiones, o que el concepto de la violación resulte acertado para enervar la presunción de legalidad del acto que se demanda, ello es objeto de análisis por parte del operador judicial al momento de proferir fallo de fondo.

Así las cosas, la Sala concluye que la excepción no está llamada a prosperar.

### 3.3 PRUEBAS

La parte demandante aportó pruebas documentales (Fls. 30-111 del expediente), y no solicitó la práctica de otros medios de prueba.

El demandado Partido de la U aportó pruebas documentales (Fls 125 al 165 y en medio digital fl 178); así mismo solicitó se oficiara a los H. magistrados del Consejo Nacional Electoral para que certifique si los aquí demandantes agotaron el trámite administrativo aplicable a la impugnación de la elección de las Directivas del Partido de la U y/o se ha cuestionado la legalidad de la Resolución 2954 de 2017 por la cual se registra y reconocen los directivos del partido de la U. En caso afirmativo informar el trámite agotado y el acto administrativo a través del cual se adoptó una decisión; así mismo certifiquen quien ejerce la representación legal del partido de la U y si este se encuentra habilitado para la expedición de avales y delegar dicha función, previa consulta de los estatutos que se encuentren debidamente registrados ante dicha entidad. La Sala negará esta prueba por ser superflua para el proceso; la resolución N° 2954 del 29 de noviembre de 2017 fue aportada por el parte demandante así mismo los estatutos del partido de la U y de las pruebas aportadas por las partes se puede determinar lo que pretende probar el partido de la U con su solicitud de pruebas.

El vinculado Consejo Nacional Electoral no aportó ni solicitó la práctica de pruebas.

El demandado José Rodrigo Benítez Vázquez aportó pruebas documentales con la contestación (Fls 212 al 222), sin embargo, no solicitó la práctica de algún otro medio de prueba.

Así las cosas, considera la Sala que las pruebas aportadas son suficientes para resolver el litigio por lo que se decretarán.

### 3.4 FIJACIÓN DEL LITIGIO

Para la Sala el litigio gravita en determinar si es procedente declarar la nulidad de la elección del demandado, con ocasión del AVAL otorgado al señor José Rodrigo Benítez Vázquez por parte del Partido de la U para ser alcalde del Municipio de Versailles Valle del Cauca.

### 3.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Como quiera que el presente asunto es una controversia de pleno derecho, habida cuenta que no existen medios de prueba por practicar, se concederá el término judicial de cinco (5) días para que los sujetos procesales puedan solicitar copia de las piezas procesales que requieran para sus alegaciones finales, dirigiendo el memorial respectivo al correo electrónico [rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co); vencidos estos, se concederán cinco (5) días para que se tramiten las solicitudes de las partes a que haya lugar.

Vencido el término anterior, se correrá traslado para alegar de conclusión por escrito por el término de diez (10) días, término dentro del cual el Ministerio Público podrá rendir su concepto; lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 181 del CPACA.

### 3.6. Otros asuntos.

En el expediente se observa lo siguiente:

i) A través de Resolución No. 0092 del 21 de enero de 2020, en aplicación del artículo 160 del CPACA se delegó como abogado principal a Uriel López Vaca y a Víctor Danilo Charrys Pérez y Franklin José López Solano, en calidad de abogados suplentes del Consejo Nacional Electoral. El abogado Charrys Pérez presenta la contestación de la demanda<sup>6</sup>

ii) El demandado José Rodrigo Benítez Vázquez confiere poder especial, amplio y suficiente a los abogados Armando González y Jerson Eduardo Valencia Arango Fls. 222-224, el cual será aceptado por reunir los requisitos del artículo 74 del C. G. P.

---

<sup>6</sup> Fls 180 al 183 c.ù.



iii) El partido de la U es representado por el Secretario General y Representante Legal, Dr. Álvaro Echeverry Londoño según resolución N° 2954 de 2017 (Fls 130 al 133)

En mérito de lo expuesto, el Despacho 12 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### RESUELVE

**PRIMERO: APLICAR** al proceso las disposiciones de la Ley 2080 de 2021 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto.

**SEGUNDO:** Tener por contestada oportunamente la demanda por parte del Partido de la U, Consejo Nacional Electoral y el demandado José Rodrigo Benítez Vásquez.

**TERCERO: DECLARAR** no probadas las excepciones previas propuestas por los demandados, de conformidad con lo expuesto en este proveído.

**CUARTO: TENER** como pruebas los documentos físicos y en medio digital aportados por los sujetos procesales, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de proveído.

**QUINTO: NEGAR** la solicitud de prueba documental realizada por el partido de la U, de acuerdo a lo dispuesto en la parte motiva del proveído.

**SEXTO: PRESCINDIR** del periodo probatorio.

**SÉPTIMO: CONCEDER** el término de cinco (5) días para que los sujetos procesales puedan solicitar copia de las piezas procesales que requieran para sus alegaciones finales, dirigiendo el memorial respectivo al correo electrónico [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co). vencidos estos, **CONCEDER** cinco (5) días para que se tramiten las solicitudes de las partes a que haya lugar.

Vencido el término anterior, **CORRER** traslado para alegar de conclusión por escrito por el término de diez (10) días, término dentro del cual el Ministerio Público podrá rendir su concepto; lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 181 del CPACA.

**OCTAVO:** Reconocer al abogado Uriel López Vaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.641.683 y T. P. 178.711 del C. S. J., como apoderado principal del Consejo Nacional Electoral, en los términos y para los efectos del poder delegado según Resolución 0562 de 2020, obrante a folio 192 del expediente.

Reconocer a los abogados Víctor Danilo Charrys Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.086.350 y T. P. 301.675 del C. S. J, y Franklin José



López Solano, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.816.532 y T. P. 289.413, como apoderados suplentes del Consejo Nacional Electoral, en los términos y para los efectos del mandato delegado, obrante a folio 192.

**NOVENO:** Reconocer a los abogados Armando González y Jerson Eduardo Valencia Arango identificados con cédula de ciudadanía No. 14.977.958 y T. P. 108.025 del C. S. J y C.C. N° 1.143.835.566 y T.P. N° 253.835 del C.S. de la J. como apoderados del señor José Rodrigo Benítez Vásquez, en los términos y para los efectos del poder conferido a folios 222 -224.

**DECIMO: NOTIFICAR** la presente providencia en los términos previstos en los términos previstos en los artículos 50 al 52 de la Ley 2080 de 2021; una vez ejecutoriada y vencido el término de alegar, ingrese el expediente al despacho para proveer lo pertinente.

**DECIMO PRIMERO:** Por Secretaria, con la notificación de este auto, insertar el vínculo para consultar el expediente digital completo en SharePoint por los sujetos procesales.

  
ZORANNY CASTILLO OTALORA  
Magistrada

Rama Judicial

  
GUILLERMO POVEDA PERDOMO  
Magistrado

  
VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ  
Magistrado